

## **La perspectiva parcial: el movimiento obrero frente a la política salarial del gobierno de Frei Montalva, 1964-1967**

Luis Thielemann\*

### RESUMEN

Durante la primera mitad del gobierno de Eduardo Frei Montalva y la Democracia Cristiana (1964-1967), hubo en Chile una masiva actividad huelguística, estando sus principales motivos relacionados con las condiciones salariales de los trabajadores. Tomando distancia de las interpretaciones tradicionales que han visto en las huelgas por mejores salarios de la década de 1960 una forma de actividad natural del movimiento obrero, o signo de su despolitización o moderación, este artículo propone que tales manifestaciones fueron una acción pensada políticamente por el movimiento obrero, cuya racionalidad parcial descansaba en la búsqueda de una mejor posición, y cuyos efectos incidieron en el desarrollo del país. Desde la perspectiva historiográfica del conflicto político, el trabajo analiza el ciclo de huelgas salariales comenzado en marzo de 1965 con el desafío al ajuste salarial propuesto por el Gobierno y terminado a fines de 1967 en la derrota al plan de ahorro forzoso conocido como 'chiribonos'. Por otro lado, en el ciclo mencionado se observa un elevado grado de planificación y desarrollo de estrategias políticas, acompañadas de un discurso radicalizado por parte del movimiento obrero, y en pos de la conquista de su interés parcial. De esa forma, se presenta una revaloración histórica de la huelga salarial como práctica política.

**PALABRAS CLAVE:** Huelga, Salario, Movimiento Obrero, Desarrollismo, Política Obrera.

### **The partial perspective: the labor movement against the wage policy of Frei Montalva's government, 1964-1967**

### ABSTRACT

During the first half of the government of Eduardo Frei Montalva and the Christian Democracy, there was a massive strike activity in Chile (1964-1967) whose main motives were related to the salary conditions of workers. This paper takes distance from the traditional interpretations that saw in the wage strikes of the 1960s either a form of natural activity of the labor movement, or a sign of its depoliticization or moderation. In contrast, it argues that they were politically thought actions performed by the workers' movement. The partial rationality of the strikes resided in the strife for improving the workers' movement position, and their consequences affected the political development of the country. Taking political conflict as its main historiographical perspective, the article studies the cycle of wage strikes begun in March 1965 with the challenge to the salary adjustment proposed by the Government

---

\* Historiador. Profesor Adjunto, Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae.

✉ lthielemann@uft.cl

Recibido abril 2019 / Aceptado junio 2019

Disponible en: [www.economiaypolitica.cl](http://www.economiaypolitica.cl)

and ended in the defeat of the forced wage savings plan known as ‘chiribonos’. During this cycle, a high degree of planning and development of political strategies is observed, accompanied by a radicalized discourse on the part of the workers’ movement in pursuit of its partial interest. In so doing, the paper presents a historical reevaluation of the wage strike as a political practice.

KEYWORDS: Strike, Wages, Labor Movement, Developmentalism, Working Class Politics.

**E**n la historiografía, específicamente, la relación salarial moderna —entre patrones y trabajadores, pero también entre estos y los gobiernos— ocupa un lugar opaco. Si bien nadie podría acusar que dicha relación no ha sido importante en la conformación de las sociedades capitalistas, así como en su devenir político, se le suele considerar una relación permanente y básica, propia de la naturaleza del sujeto obrero. Esto, a pesar de que en el período se observa una radicalización política del movimiento obrero basada principalmente en una agudización del conflicto salarial, lo que es válido tanto para la región como para todo occidente.

En general, los estudiosos coinciden en tratar las huelgas salariales como el clima social del período desarrollista, cuya importancia reside únicamente en los efectos que producen en la economía o en la política del Gobierno. Según este consenso, la huelga sería una práctica parcial, corporativa y, por ende, polarmente opuesta a la práctica política universal. Por una parte, distintos autores han acusado, desde la misma década de 1960, la ausencia de una vocación política, o intencionada hacia una reforma general de la sociedad, en la práctica huelguista del movimiento obrero (Angell y Moroni 1969; Landsberger y McDaniel 1976). La forma más acabada de esta posición se encuentra en la obra de Arturo Valenzuela, *El Quiebre de la democracia en Chile*. Este último volumen estableció una explicación canónica sobre el período y, para el tema de este escrito, prescribió distintas explicaciones que naturalizan el ascenso huelguista y el crecimiento de la actividad sindical durante el gobierno de Frei Montalva, las que en general habrían buscado demostrar una ausencia de politización radical en el movimiento obrero (Valenzuela 2013: 61-70). Por otra parte, la historia social que se ha preocupado de destacar la radicalización popular de la década de

1960 y hasta 1973, ha considerado mayoritariamente la emergencia de la huelga salarial como signo de moderación, una degradada “guerrilla de recursos”, muy lejana a cualquier idea de revolución (Salazar Vergara 2014: 251-86). Esta visión ha sido fuertemente tributaria de la tradición intelectual de la izquierda contemporánea a los hechos, que consideraba la centralidad salarial del movimiento obrero de entonces como parte de la ideología del Frente Popular, la que sostiene la subordinación política obrera a la clase media y al desarrollo estatal (Faletto y Ruiz 1970). Así, tanto por los intelectuales de izquierda como por aquellos más sistémicos, la importancia de la huelga salarial habría sido opacada por la historia.

Entre quienes estudiaron las huelgas obreras del período, la discusión se centró en la pregunta sobre cuáles podían ser consideradas como políticas y cuáles económicas (Barrera 1971; Pizarro 1986). Si bien sus aportes son importantes y pioneros en el estudio de la huelga en el siglo XX desde una perspectiva sociológica, ambas perspectivas coinciden en la imposibilidad de diferenciar, en las huelgas realmente ocurridas, los contenidos económicos de los políticos. Esta confusión se presenta como una oportunidad de investigación histórica, pues obliga a la pregunta de cuán política era una huelga salarial para el movimiento obrero. En otras palabras ¿cuál fue la relevancia política de la huelga salarial? Y en específico, ¿cómo asumió políticamente el movimiento obrero el conflicto salarial ocurrido entre 1965 y 1967?

Para responder a estas preguntas, el siguiente escrito observa las huelgas de los años sesenta como expresión de la centralidad política del movimiento obrero respecto a la disputa salarial. Si se observa la historia de dicha década desde el punto de vista parcial del movimiento obrero, la lucha salarial aparece al centro de la política y su proporción respecto de la ganancia conforma la métrica de sus avances y retrocesos. La hipótesis es que, durante los años 1965 y 1967, el movimiento obrero asumió abiertamente el conflicto salarial como una lucha con incidencias políticas. En un país carente de dispositivos redistributivos profundos, así como de una economía fuerte que los sostuviera, la presión por resolver en el salario las formas más notorias de desigualdad se volvió un hecho político, y el movimiento obrero parece haberlo tenido claro en la década de 1960. En consecuencia, lo

abordó políticamente, es decir, calculó la relación de fuerzas, preparó el enfrentamiento y priorizó tácticamente sus objetivos para el ciclo de lucha que se abrió en 1965. Desde aquel año, el enfrentamiento entre la iniciativa de ajuste salarial del gobierno de Frei Montalva y la ofensiva por aumentos del movimiento obrero se transformó en la más encarnizada disputa del período. La victoria obrera y la derrota de Frei Montalva, clara a fines de 1967, se convirtió en la derrota de toda la iniciativa política de su gobierno hasta el final de su mandato.

### **1. Condiciones estructurantes de la centralidad salarial**

Entre las variadas razones estructurales que explican la importancia de la lucha salarial en la actividad obrera del período, destacan, en primer lugar, el rol que jugaba el salario en los equilibrios de las relaciones sociales, sobre todo debido a la legislación laboral del período; segundo, la presión inflacionaria, que devaluaba velozmente los salarios; por último, los intentos de modernización afectaban las formas tradicionales de mejora salarial, por lo que generaban rápidas resistencias por parte de los obreros. En el universo general de radicalización social de la década de 1960, estos factores empujaron fuertemente a la politización de la disputa salarial. A continuación, se profundiza en esta materia.

Las relaciones laborales en Chile tendían a ubicar al salario como el principal tema del conflicto industrial. La existencia de una entidad unificadora del sindicalismo chileno, como lo era la Central Única de Trabajadores (CUT) desde su fundación en 1953, se contradecía con su no reconocimiento legal por parte del Estado, cuestión que no cambió sino hasta 1972, un año antes de ser disuelta por la dictadura de Augusto Pinochet. Lo mismo ocurría con las federaciones y todo tipo de mediaciones y direcciones más allá del lugar de trabajo. Sin reconocimiento institucional, era en la generalización del conflicto situado en el lugar de trabajo cuando el movimiento obrero podía demostrar más efectivamente su poder. Fábrica a fábrica, los militantes obreros desataban huelgas y estas, a su vez, provocaban oleadas por sector productivo o a nivel nacional. En su conjunto mostraban una armonía reivindicativa que daba consistencia al movimiento obrero y a la CUT y sus federaciones (Angell y Moroni 1969: 38-44). Por tanto, la

centralidad política de las huelgas se acrecentaba en la medida que las franjas organizadas del movimiento obrero basaban en ellas su fuerza.

Esta centralidad se agudizó en 1956, con la ley n°12006 y como parte de las medidas de contención de la crisis económica del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Dicha modificación legal eliminó el reajuste automático vía Comisión Mixta de Sueldo, formada por obreros y patrones y existente desde 1924. Más adelante, en 1961, con la ley n°14688, los salarios quedaron amarrados al movimiento de la inflación a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual (Ministerio de Hacienda 1956, 1961). Estos cambios pusieron metafóricamente el debate salarial entre la oficina de la gerencia y el piso de los galpones fabriles, aumentando su importancia al utilizarse el IPC del año anterior como la medida que determinaba los salarios del año en curso. La inflación, sin embargo, solía aumentar mes a mes, con lo que el alza legal del salario quedaba rápidamente desbordada por el rampante aumento del costo de vida. En consecuencia, el salario considerado necesario y justo por los obreros no era el ofrecido por el Estado, sino aquel que quedaba plasmado en los pliegos de peticiones y que posteriormente se conseguía generalmente a través de la huelga. Esta situación los forzó a elaborar una estrategia específica en la fragmentaria y agotadora lucha fábrica a fábrica.

La centralidad del salario en la práctica política del movimiento obrero se veía también determinada por la permanente y persistente inflación en la economía regional. Esta situación tensionaba aún más la demanda salarial de los trabajadores, en tanto su poder de compra se agotaba mes a mes. Como ha indicado Durán (2018: 272), con base en datos de Rodríguez Weber (2014), esta alta inflación hacía que el alza salarial se tratara en realidad “de un tránsito (...) conducente a recuperar la capacidad adquisitiva del salario que la alta inflación había afectado”, si bien “en algunos casos, probablemente, esto conducía a una mejora más allá de una recuperación”. La mayor parte de estas mejoras en los salarios se produjo a partir de 1965 contra la voluntad inicial del gobierno de Frei Montalva por ignorar las demandas de la CUT, o incluso desarticular a la misma Central. En general, el único factor subjetivo a favor de las alzas fue la presión obrera (Barrera 1971: 155; Stallings 1978: 102-5).

La misión de economistas norteamericanos conocida como ‘Klein-Saks’, que asesoró al gobierno de Chile entre 1955 y 1958, fue la más importante de estas consultorías; con todo, hubo varias más con propuestas similares que se asentaron en distintas fábricas del país durante la década de 1960 (Lüders 2012). La introducción de formas de intensificación del trabajo y la vigilancia de los obreros en talleres y fábricas, medidas conocidas como ‘tayloristas’ o ‘taylorización productiva’, redundó en la tensión de la cuestión salarial. Esto debido a que los cambios del régimen interno de los establecimientos fabriles buscaron introducir la competencia entre obreros y también contra el reloj. Por este camino, el salario –que había sido por décadas un asunto de relaciones de fuerza colectiva– debía ajustarse al rendimiento individual, el cual era registrado en métricas que se pensaban como respuestas inextricables de la ciencia a necesidades de la empresa. Todo ello significaba una pérdida de poder del movimiento obrero, ya que los indicadores productivos que se les imponían a los obreros como objetivos se presentaban como superiores o inapelables ante las razones del sindicato y la necesidad obrera (Thielemann 2018: 125-6; Winn 1990).

Así, el rechazo obrero a la taylorización, fuerte en la primera mitad de la década de 1960, estaba también motivado por la defensa del colectivo. Pero, además, dado el grado de estancamiento y atraso de la industria en Chile durante este período, los premios por producción tenían un techo más bajo que el de las relaciones de fuerza y el chantaje obrero. Incluso, para los obreros mejor pagados en el país durante la década de 1960, como los del cobre, los obreros textiles o del acero en el sur, la taylorización impactaba en su seguridad salarial. En todos esos sectores económicos, entre 1955 y 1965, hubo huelgas contra la ‘racionalización productiva’, como le denominaban los patrones al proceso. Los trabajadores de la denominada ‘aristocracia obrera’ descubrieron que, aunque gozaban de privilegios salariales, seguían sin controlar su trabajo y continuaban sometidos a las necesidades de los propietarios. Al igual que los obreros de peor paga, la movilización se les demostró como la única forma de convertir en poder colectivo lo que era solo un elevado salario individual. Por otra parte, la actitud de la militancia obrera de base, abrumadoramente izquierdista, en pos de dirigir ese activismo y malestar hacia una lucha nacional en clave clasista, como lo hizo la CUT crecientemente durante la década, hacía que la disputa

emprendida por estos sindicatos resultase en mejoras para los obreros más pobres y con menor poder de negociación. Sobre esto último cabe una nota. Aun cuando se suele presumir (y así se hizo entonces) que esta militancia de izquierda entre la clase obrera (principalmente socialista y comunista) fue la instigadora de la movilización salarial durante el gobierno de Frei Montalva, en realidad su participación no es fácil de comprobar. Primero, porque en general la disputa salarial venía en alza desde antes de 1964; pero, sobre todo, porque las movilizaciones sociales no suelen activarse por comando de sus direcciones. Por el contrario, sus estallidos o la simple mayor o menor adhesión de las bases a una movilización o una huelga, entonces y hoy, continúan siendo difíciles de distinguir. Como se verá en las páginas que siguen, la movilización tenía profundas motivaciones de base, las que empalmaban con los objetivos de la militancia o, más aún, los determinaban.

A partir de la estructuración del problema salarial hacia mediados de la década de 1960, resulta entendible que las huelgas salariales de 1964 a 1967 –y también después– hayan tenido una centralidad política para los trabajadores, es decir, en cuanto a su relación con el Estado y los patrones (estos últimos entendidos como clase). Esta centralidad política no consistió únicamente en reacciones obreras a la agencia patronal o estatal, sino también en una actitud ofensiva y planificada con frialdad y seriedad. Era el aprendizaje de que la lucha, a pesar de todo, paga. En el recién visto marco de relaciones laborales de la década de 1960, los obreros demostraron una capacidad conspirativa y práctica que se movía a veces con impresionante facilidad por canales legales, a legales e ilegales, todo con tal de aumentar o mantener el salario en los niveles deseados. En los años del agrietamiento del modelo desarrollista, los obreros no fueron meros observadores o víctimas, sino que protagonistas de la crisis con una agenda y perspectiva propias, en la cual el salario estuvo siempre al centro, como métrica y símbolo de la lucha de clases.

## 2. El desafío freísta y la primera victoria obrera. 1965-1966

En su discurso al asumir la presidencia, Frei Montalva alertó sobre la dificultad de detener el “tren inflacionista” y situó explícitamente el

problema ante sus bases. Comenzó por fustigar a quienes no le dieran tiempo: “Nada peor que la inmadurez de los impacientes”. A finales del año 1964, el presidente pidió ayuda a las que denominó como las “auténticas bases populares”, suplicándoles que los acompañaran “ahora para que no se cumpla en mí el viejo proverbio: Me alzas en alto y me abandonas al viento” (Frei 1964). En marzo de 1965, el gobierno anunció su decreto de ajuste salarial: un 38,4% respecto del salario del año anterior y que correspondía al alza del costo de la vida a fines de 1964. Desde entonces, el decreto fue considerado en los discursos del Gobierno como el límite de responsabilidad que debía demostrar el movimiento obrero ante el país. 38,4% era el máximo de alza salarial posible, pues, según la administración Frei, un alza mayor significaría un elemento crítico para el equilibrio económico. Para el gobierno demócrata cristiano este punto era central, ya que significaba la primera gran prueba de fuerzas frente a un movimiento obrero históricamente izquierdista y reacio a los pactos. Reflejo de esta importancia fue que el ministro del Trabajo, William Thayer, realizó giras por el país el primer trimestre de 1965 explicando el decreto de ajuste. La estrategia estaba diseñada por el Ministerio de Hacienda, en que su titular, Sergio Molina, buscaba llegar a un sistema de convivencia pactada entre los empresarios, los trabajadores y el Gobierno:

Esta proposición significa que algunos trabajadores harán un sacrificio mayor en favor del país. Se trata de aquellos que debido a la fuerza de su sindicato y al poder monopólico de la industria en que trabajan suelen obtener aumentos de remuneraciones que están por encima del alza del costo de la vida. Al mismo tiempo el Gobierno solicita una colaboración mayor a los grupos de asalariados que están en condiciones de darla. (*Las noticias de última hora* 1965: 4)

La misma solicitud realizó Thayer, en una carta a los trabajadores del carbón a comienzos de marzo de 1965. En ella, con un tono paternalista que se mantendría desde el Gobierno con variaciones más pasivas o agresivas según la coyuntura, el ministro del trabajo insistió en la importancia de contener las demandas salariales. Thayer argumentó que la contención salarial era la parte que le tocaba a los obreros en una situación de acuerdo en que se estaba logrando, según la carta del ministro, limitar las alzas de bienes y servicios al 19% y pedirle a las empresas ajustar a la baja su ganancia. El tono paternalista



del ministro DC se hizo evidente al intentar explicar las razones de su solicitud a los sindicatos, exhibiendo a la vez las contradicciones de la introducción de una línea política de ajuste salarial en un gobierno que había prometido una revolución:

Estimados amigos, el proceso de corregir las injusticias sociales sobre la base de modificar en su raíz misma las estructuras productivas y las bases de distribución del ingreso no es tarea de cien días de gobierno, ni de un año, sino que de varios años, y, a veces, de varias generaciones. Lo propio, sin embargo, del cambio revolucionario, es que opere en la raíz misma del mal y que tenga el acento de aceleración concertada, que lo diferencia del paulatino ritmo de la evolución. (*El Mercurio* 1965a : 23)

La carta de Thayer asumía las posibles negativas tanto de los obreros organizados como de los empresarios. El empuje desde el Gobierno fue tal, que contó con el apoyo de las vocerías de prensa de la élite chilena. *El Mercurio* publicó avisos publicitarios, sin firma, en sus páginas en que se leía: “También de usted depende que ganemos la guerra contra la inflación” (*El Mercurio* 1965b: 31), en un mensaje que probablemente iba dirigido a los pequeños comerciantes y, sobre todo, al movimiento obrero. En esos meses se definía la mayor parte de la jugada salarial del Gobierno, pues, según un detallado estudio de los pliegos presentados en 1964, era en los primeros meses del año cuando se concentraba la presentación de los pliegos de peticiones y se desataban las huelgas salariales (Barría Serón 1967: 44).

La propuesta de tolerar, como sacrificio en nombre del país, el congelamiento salarial fue recibida por parte de los sectores más militantes del movimiento obrero como un desafío del Gobierno. Si la lucha salarial era la principal forma de expresión de poder del movimiento obrero, la estructura legal no le garantizaba una presencia institucional de relevancia, y frente a un Gobierno que llegaba con dos proyectos relativos a trabajadores, uno de ajuste salarial y el otro destinado a debilitar el poder de la CUT, esto se volvía fundamental. Para la CUT y las franjas organizadas del movimiento obrero, entonces, el anuncio del límite salarial fue entendido como un desafío político revestido como medida económica (Barría 1971: 122).

Cuando el Gobierno anunció el límite salarial, la mayoría de los sindicatos que ya habían presentado sus pliegos de peticiones incluían

reajustes muy superiores al 38,4%; en el caso del gremio del Cuero y el Calzado, históricamente combativo, ya había obtenido un alza de entre el 45% y el 60%. Además, la prensa afín al movimiento obrero acusó que para los dirigentes obreros las estadísticas oficiales no eran creíbles y, aunque lo fuesen, tampoco contemplaban las alzas en bienes y servicios ocurridas desde enero de 1965 (*Las noticias de última hora* 1965a). La desconfianza institucional era extendida entre los dirigentes, permitiendo comprender la distancia que tenían con la convocatoria gubernamental al ser responsables de los patrones y el Estado. Según una encuesta de 1963 del Instituto de Organización y Administración de la Universidad de Chile (INSORA), si bien la mayoría de los dirigentes obreros reconocía tener buenas relaciones industriales, los mismos declaraban su desconfianza hacia el patrón, considerado como un enemigo permanente del sindicato y con poca disposición a los acuerdos sin conflicto de por medio. En lo específicamente atinente al salario, el 55% de los dirigentes consideraba que las utilidades de la empresa en que trabajan eran altas. A su vez, un 66% indicó que de esta ganancia disfrutaban poco o nada y la mayoría opinó que sus salarios eran bajos. Solo un 8% se mostró satisfecho. La huelga directa y en la empresa era la mejor herramienta para combatir esta situación según un 70% de ellos; mientras, una similar proporción se mostraba incrédula de conseguir mejores salarios a través de la política parlamentaria o del Estado (Landsberger, Barrera, y Toro 1963).

El movimiento obrero también tuvo una respuesta política a la presión discursiva relativa a la responsabilidad nacional con el desarrollo del país. La prensa de la CUT sostuvo que la lucha contra el ajuste salarial apuntaba a un “problema de fondo en el desarrollo de la estructura económica”, el que consistía en “detener la injusta distribución de la renta nacional que posibilita que siendo los trabajadores el 48% de la población activa reciban apenas el 19% y que los 350 mil empresarios, patrones y rentistas se lleven más del 50% de nuestro ingreso nacional” (*Central Única* 1965b: 4). Esta argumentación, según la cual la inflación era producto del carácter dependiente de la economía chilena a los países capitalistas del hemisferio norte, especialmente Estados Unidos, estaba bastante extendida en la militancia sindical de izquierda del período y permitía atar los cabos de la

demanda gremial de mejores salarios con el discurso antiimperialista de la izquierda marxista (Vergara 2008: 2).

Por su parte, la prensa de izquierda apoyó las huelgas y ofreció argumentos en favor de la causa del movimiento obrero organizado en la CUT. En sus páginas se sostuvo que el veto a las alzas salariales empobrecía más a los trabajadores, pues:

No solamente se atrasa el pago de los reajustes mientras persiste un incremento constante del nivel de precios, como lo muestra el alza de la cotización del pan, sino que se cancela casi toda posibilidad de defensa ante el deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios y pensiones. (*Las Noticias de Última Hora* 1965b: 2)

Esto era del todo cierto. Días antes de que el Gobierno publicara su decreto de ajuste salarial, los precios del transporte público subieron un 50% generando una oleada de protestas de estudiantes y trabajadores, que intentó, sin éxito, ser rechazada por la policía (*Las Noticias de Última Hora* 1965c: 10). La prensa de la CUT también se refirió a los incontenibles efectos de la inflación en el costo de la vida de los obreros respecto de la política de congelamiento de sus salarios. En su edición de mayo de 1965, en medio de un amplio proceso de huelgas industriales, sostuvo que “la ola de alzas que se ha desatado en estos primeros meses del año 65 y que alcanza al 15,5% es otra de las causas de la angustia del sector trabajador” (*Central Única*, 1965b: 9).

Finalmente, el decreto de ajuste fue enviado al Congreso el 21 de abril de 1965, imponiendo el 38,4% para el sector público, y recomendando para los privados el mismo límite. Ese mismo mes, la oleada de huelgas fue notoria y demostró lo endeble de la capacidad de convencimiento del Gobierno sobre los obreros organizados. Las cifras totales muestran un espectacular ascenso de la huelga obrera: de 780 registradas en 1963 y 676 en 1964, se pasó a 1.026 en 1965. De ellas, el 86,9% fueron ilegales y casi en un 80% se dieron en el sector privado en donde se duplicó la cantidad de huelgas respecto del año anterior (Díaz Bahamonde, Lüders y Wagner 2016). La prensa de la CUT del mes de abril de 1965 dio cuenta con orgullo de las victorias obreras sobre el límite gubernamental:

La presión ejercida por el Gobierno y el ministro Thayer sobre las empresas para que no concedan más reajustes que el 38,4% no ha

dado los frutos esperados y ahí están los numerosos gremios que ya han sobrepasado la barrera del reajusta impuesto. Los más destacados se pueden citar: la Federación Nacional del Cuero y el Calzado (62%); el Sindicato Industrial de la Compañía Minera Santa Fe (55%); los trabajadores de la Compañía Minera La Africana (42%); Sindicato de la Viña Santa Teresa (65%); Sindicato Industrial Sali Hoschschild (52%); Sindicato Mantos Blancos (de 42% a 52% de acuerdo a una escala de remuneraciones); Cerro Blanco de Polpaico (48%); Canteros de Lonco, Landa y Santa Elisa de Concepción (55%). [...]

Además hay una veintena de sindicatos y gremios que tienen planteados sus conflictos por encima de la barrera congelatoria impuesta por el Gobierno. Entre ellos están los cuatro sindicatos de la Compañía Minera de La Disputada de Las Condes con un 80% de reajustes y con 44 días de huelga; los sindicatos de los minerales de Potrerillos, Salvador y Barquitos con un 85% y con huelga votada para hoy Primero de Mayo; Sindicato de la Oficina Salitrera Alemania con un 50%. (*Central Única* 1965a: 4)

Para mayo de 1965, la CUT siguió cantando victoria. En la edición de ese mes de *Central Única*, se enumeran sesenta y dos organizaciones sindicales que habían roto la barrera del 38,4% en sus respectivas huelgas. De ellas, treinta habían conseguido reajustes sobre el 50% y hubo cuatro que tuvieron reajustes del 100%. La supuesta “irresponsabilidad” de las franjas organizadas de los trabajadores para con la economía nacional se explicaba como la contraparte de su responsabilidad con las necesidades de sus bases. De esta forma, la razón del movimiento obrero se mostraba parcial y disidente respecto de los discursos de las necesidades del desarrollo nacional, hegemónicos desde la década de 1930.

Las posiciones de los actores en las huelgas salariales de 1965 marcaron fuertemente el tono de las relaciones entre obreros y el Gobierno, atizando una polaridad y resentimientos que se mantuvieron hasta 1970 mediante el acrecentamiento de la violencia y la profundización de la tradicional desconfianza política del movimiento. Hubo casos en que el Gobierno intervino en las negociaciones de una fábrica, con tal de impedir el alza salarial por sobre el límite gubernamental. Así ocurrió en la industria Saavedra Bernard, donde el sindicato local había logrado romper la barrera del 38,4%, alcanzando el 50% de reajuste tras una fuerte huelga. Según la prensa sindical, en el momento

en que el acuerdo estaba listo para firmarse el Director de Conflictos del Ministerio del Trabajo, Guillermo Videla Vial, llamó por teléfono a la gerencia para presionarla a mantener el límite del 38,4%. Forzada por los obreros, la empresa firmó finalmente el acuerdo (*Central Única* 1965b: 2). En otros casos, el límite salarial sirvió como defensa de las empresas ante el cuestionamiento sindical de base, lo que hermanaba a una patronal de mala fama entre los sindicatos con la política de ajuste del Gobierno. Así ocurrió en el estratégico ramo de la seda en las huelgas salariales de junio de 1965, en el cual el movimiento obrero había logrado, en la mayoría de sus huelgas, reajustes muy por sobre el límite del 38,4%. Por ejemplo, en Hirmas, una de las textiles más importantes del país, los obreros obtuvieron un 50% de alza salarial. En la industria de la seda los obreros mezclaron la demanda salarial con otras relativas a condiciones de trabajo o, simplemente, para garantizar por la fuerza alzas salariales pasadas. Como se sostuvo anteriormente, el salario se convirtió en la década de 1960 en el campo de acción fundamental de la política obrera, pues el dinero terminaba siendo la medida de pago de toda una diversidad de agravios e injusticias denunciadas por los obreros en las huelgas. Las siguientes notas de *Central Única* sobre las razones de la movilización del ramo de la seda en 1965 dan cuenta de ello:

Nos informó el sindicato mixto de la seda que las condiciones de trabajo en la mayoría de las empresas son terriblemente inhumanas: hay fábricas como la de Esteban Esymentewles, de Carrion 1551 donde todas las máquinas hacen contacto con la corriente. Allí murió electrocutado el obrero Gregorio Figueroa. Los baños están insalubres y la fábrica no tiene calefacción.

Otra fábrica que funciona en condiciones deficientes es la de Mateo Garib. Este industrial acostumbra a paralizar la industria cada dos o tres meses, con el propósito de burlar la legislación social. Los obreros son despedidos a la semana, a los 10 o 15 días de trabajo, para no pagarles salarios que le permitan vivir y para no cumplir con el pago de imposiciones al servicio de seguro social. Como las condiciones de trabajo son tan infernales, hay obreros que se van por su propia cuenta. Según informa el sindicato mixto de la seda, el industrial Mateo Garib, aparte de cometer los abusos arriba señalados, cuando se le antoja golpea a sus operarios.

Y viene la industria Kiber, que se llueve y carece de buena calefacción, porque para 50 operarios que trabajan en un galpón de media

cuadra, hay tres estufas. David Abusleme, por su parte, posee una fábrica que funciona en condiciones bastante deficientes y, por si esto fuera poco, recorta el pago del feriado legal a su personal. Tejedores a quienes corresponde percibir la suma de 180 escudos, son obligados a veranear con E°80, con la advertencia de que 'aquí no hay que hacer más cálculos'. (*Central Única* 1965c: 10)

Con el fuerte ascenso huelguista aparecieron también medios más osados de lucha. Se observó entonces cierta radicalización clasista del movimiento obrero, que se expresó como evolución de la lucha salarial, a través de la aparición de las tomas de fábrica. Para 1965 hemos registrado dos de estas acciones, una en la fábrica Me Tigrit de Talcahuano en junio, y de INDURA de Santiago en noviembre (*Central Única* 1965d; *Las Noticias de Última Hora* 1965e). Es importante destacar el comienzo de la práctica de ocupaciones de fábrica como herramienta de negociación en el conflicto salarial, pues desde 1965 ella se fue generalizando entre las franjas organizadas del movimiento obrero. Si la política obrera para enfrentar el ajuste salarial le dio una importancia crucial a los conflictos situados en el establecimiento, la ocupación del mismo se convirtió en la apuesta más elevada del sindicato para ganar la disputa al patrón. Su expansión como práctica es paralela a la expansión de la centralidad salarial en la relación entre patronos, Estado y movimiento obrero. Según un informe de Carabineros al Senado, fechado en 1971 y citado por Atilio Borón, en 1968 se registraron 5 ocupaciones de fábricas; en 1969 el mismo informe estableció 24 y para 1970 esta práctica de lucha se realizó en 133 ocasiones (Borón 1975: 99).

Durante el segundo semestre de 1965 el Gobierno apenas logró tomar consciencia del grado de derrota que había sufrido por parte del movimiento obrero. La lista interminable de huelgas en que su barrera del 38,4% había sido sobrepasada daba cuenta de una imposibilidad de doblar la combatividad de las direcciones, cuya parcialidad clasista se mostraba indiferente a los llamados a la responsabilidad económica que hacían el Gobierno, la Democracia Cristiana (DC) y los empresarios. La aparición de un discurso sobre la necesidad de políticas redistributivas centradas en el salario en las direcciones sindicales mostraba una fuerte politización de la disputa obrera de la ganancia. A partir de la búsqueda de solución a una lucha considerada económica, se descubría la práctica de la política, anclada a cambios concretos

y necesidades directas, de clase. A su vez, dejó claro, al terminar el primer año del Gobierno de Frei Montalva, que el movimiento obrero no estaba para servir de muleta de las necesidades de equilibrio del capitalismo en el país, ni tampoco para subordinarse a la presión política de la DC. Pero la batalla salarial entre el Gobierno y los obreros organizados, para fines de 1965, estaba lejos de terminar.

### **3. La insistencia salarial del movimiento obrero, la violencia estatal y el desfonde sindical de la DC**

El 19 de enero de 1966 se efectuó el Pleno de Federaciones de la CUT. La dirección del movimiento obrero se puso como objetivos centrales, nuevamente, enfrentar la política de congelamiento salarial y defender el derecho a huelga (*Las Noticias de Última Hora* 1965c: 10). Luego de un año de triunfantes movilizaciones intensas, y que habían dejado mucha desconfianza y resentimiento mutuo, los obreros notaban que la presión salarial daba frutos. La medida más pagana de la lucha de clases les invitaba a mantener el enfrentamiento al Gobierno.

Para ese año, el Gobierno insistió nuevamente con su intento por impedir aumentos salariales por sobre la variación del IPC de 1965 (25,8%). Para ello se apoyó en el cambio a la legislación de Seguridad Interior del Estado, realizado en noviembre de 1965, y que le quitaba el agravante a las multas a los patrones que tuviesen huelgas por retrasos o incumplimientos salariales, a la vez que entregaba las mismas a los tribunales del trabajo y no del crimen (Ministerio del Trabajo y Previsión Social 1965: 632). Pero ya en febrero se comenzó a visibilizar lo dificultoso del objetivo de contener los salarios. El 3 de febrero la prensa entregaba las informaciones del parte de Carabineros al Ministerio del Trabajo respecto de movilizaciones laborales. En ese momento había 27 huelgas, de las cuales 15 eran ilegales. Destacaban por su importancia la de los trabajadores pesqueros de Iquique que mantenían 10 fábricas de harina de pescado y varios barcos detenidos, y la de la Fábrica Italo Americana de Paños, FIAP, de Tomé, en que 850 obreros permanecían en huelga. En casi todas las movilizaciones la motivación central era el aumento de salarios muy por sobre el IPC (*Las Noticias de Última Hora* 1966b: 16).

El nuevo ascenso huelguista, que ya de por sí había alcanzado una relevancia política en los equilibrios del Gobierno, se amplificó al sumarse las movilizaciones del cobre de fines de 1965. La huelga de El Teniente y de varios campamentos de la Gran Minería del Cobre (GMC) –que mezclaba temas reivindicativos, entre los que se contaban los salarios, con el debate político respecto de la chilenización del cobre emprendida por el Gobierno de Frei Montalva– se volvió determinante para el conflicto obrero y la lucha salarial. Más que un problema de orden público o responsabilidad con la economía nacional, la masacre de El Salvador tuvo un sentido político difícil de negar. Su terrible final, y es lo que trataremos en lo que sigue, puede ser comprendido como una acción política de parte de la DC y el Gobierno para contener una nueva ofensiva huelguista y, de paso, fortalecer su línea de congelamiento salarial.

Como han sostenido investigaciones como la de Ángela Vergara y Manuel Barrera, más específicas, o la de Crisóstomo Pizarro, mucho más general, las huelgas en la minería del cobre fueron uno de los elementos centrales en la crispación política del período (Barrera 1978; Pizarro 1986; Vergara 2008). En el ramo, la situación de huelgas ilegales y masivas se agudizó de forma particular, y de 3.757.910 días-hombres perdidos por toda la minería nacional (carbón, salitre, cobre, etc.) entre 1955 y 1969, 3.293.672 de ellos fueron en las huelgas de la GMC (Pizarro 1986: 176). Particularmente entre los años 1964 y 1966 la movilización se agudizó profundamente, tanto por la disputa salarial, una vez más en el centro, como por la discusión política sobre el trato con las mineras norteamericanas y la posible estatización del mineral ('la nacionalización') o, bien, la compra de la mitad a los norteamericanos ('la chilenización'). Para 1963, el 77,6% de la población activa en la GMC había participado en una huelga o movilización en su trabajo, proporción que ya era muy alta; dos años más tarde, esta proporción era del 97,9%. Durante el Gobierno de Frei Montalva casi la totalidad de los trabajadores de la GMC había participado en algún movimiento de huelga, los que en su inmensa mayoría tuvieron motivos salariales, aunque confundidos con la discusión política sobre la chilenización (Pizarro 1986: 175; Vergara 2008: 133-7).

En la vocería de Héctor Olivares –vicepresidente de la Central de Trabajadores del Cobre y diputado del PS– los obreros organizados del



cobre destacaron por la prensa del 1 de enero de 1966 que en las luchas del año anterior habían obtenido conquistas que los parlamentarios DC y el Gobierno les habían negado. El dirigente agregó que “se le dobló la mano al Gobierno en su política antigremialista y atentatoria para las organizaciones sindicales”. Olivares y la izquierda obrera en el cobre celebraban tanto un triunfo sobre el Gobierno que “debió agachar la cabeza, porque encontró un gremio firme, unido y disciplinado”, como electoral, pues en 1965 Héctor Olivares fue elegido dirigente del Sindicato de Sewell-Mina de El Teniente, con más de cinco mil votos. Toda la directiva del más importante sindicato de trabajadores de la *Braden Copper Company* fue ganada por tres socialistas y dos comunistas del Frente de Acción Popular (FRAP), aplastando a la DC que no eligió ni un solo dirigente (*Las Noticias de Última Hora* 1966a: 2). La centralidad política del salario era tal que, como se verá, la defensa del Gobierno que hicieron las bases sindicales DC fue la principal razón de su crisis en el sindicalismo durante esos años.

A las 4 de la madrugada del 3 de enero de 1966 se inició la huelga en el mineral de cobre de El Teniente y se mantuvo por más de dos meses. Hacia fines de febrero, los mineros de El Salvador se sumaron a la huelga en solidaridad. La situación huelguista estaba desatada y la DC, como en el caso de Sewell, perdía el control de los pocos bastiones sindicales que le permitían maniobrar en el movimiento obrero. Ante una decidida política obrera de lucha salarial, el Gobierno pasó de estar a la ofensiva a verse cada vez más sitiado. Patricio Aylwin, entonces senador DC, llamó a aplicar “mano dura”, bautizando así una nefasta línea política del Gobierno, y amenazó a obreros y militantes de izquierda con reprimir desde el Estado con “todo su poder de fuego” (Cerde Inostroza 2014: 136). El Gobierno emitió los decretos de reanudación de faenas y de Estado de Emergencia en las provincias mineras cupríferas a comienzos de marzo de 1966 y el día 3 fueron detenidos e incomunicados seis dirigentes de las faenas de El Salvador y Potrerillos. El Gobierno ordenó detener y sacar del campamento minero a todos los periodistas el día 10 de marzo, como macabro anuncio de que nadie podría atestiguar lo que allí iba a ocurrir. El día 11, finalmente, Frei Montalva ordenó desalojar por la fuerza el sindicato. Los obreros que quedaban, y las mujeres, jóvenes y niños de la ciudad minera bajaron

al local a defenderlo. Sin mediar provocación o diálogo, los hombres del ejército y de Carabineros abrieron fuego con armamento de guerra y balearon a mineros, mujeres y niños fuera de la sede del sindicato de los trabajadores del cobre en El Salvador, en la entonces provincia de Atacama. Mataron a ocho personas: seis mineros y dos mujeres. La represión de la empresa que siguió al ataque armado del Estado fue feroz y más de 120 trabajadores fueron despedidos. Quince de ellos fueron además demandados legalmente; casi todos eran militantes de partidos de izquierda (Vergara 2008: 146-7). El rol de la masacre estaba claro: contener la presión obrera, la “huelga irresponsable”, al costo que fuese necesario, mientras se intentaba disciplinar a un componente estratégico del movimiento obrero chileno y cuyo ejemplo soberbio, sobre todo en la lucha salarial, servía de referencia de lucha a las franjas militantes del movimiento popular.

A pesar del fuerte golpe ofensivo desde el Gobierno, la Confederación de Trabajadores del Cobre y la CUT respondieron con un paro nacional el 15 de marzo de 1966, que demostró nuevamente la poderosa convocatoria del movimiento obrero, así como su repudio hacia el Gobierno de Frei Montalva (*Las Noticias de Última Hora* 1966c: 12; *Las Noticias de Última Hora* 1966d: 5). La desmoralización abundó entre las bases sindicales de la DC tras la aplicación de la mano dura contra el movimiento obrero y sus reivindicaciones, produciéndose un desfonde sindical del partido de Gobierno. En 1966, la DC quedó casi sin representación en el sindicato de El Salvador (Vergara 2008, 148). En junio del mismo año, cuando se renovó el frente sindical de la DC, quien quedó a su cabeza fue Ernesto Vogel, de los ferroviarios y cercano a los “rebeldes” del partido y opositores a Frei Montalva y su sector en la DC. Como se observa, mientras por una parte la razón parcial y clasista unificaba a buena parte del movimiento obrero en la disputa salarial liderada por la CUT, por otra, la razón “nacional” del Gobierno y la DC hacía colapsar su posición en los sindicatos. Otra prueba más de la importancia política de la lucha salarial.

De todas formas, el golpe represivo se sintió en el movimiento obrero. Los estados de excepción decretados para buena parte del país contuvieron de inmediato las movilizaciones más agudas, y, aunque es difícil discernir el efecto directo, es notorio que tras la violencia

represiva de marzo de 1966 se detuvo la ofensiva huelguista. Así, para 1966 el total de huelgas (828) se redujo respecto de 1965 (1.026), aunque manteniéndose por sobre las cifras de 1964 (676). Si bien esta reducción no parece ser espectacular, donde más se notaron los cambios fue en el sector público, es decir, donde los sindicatos tenían una relación directa con sus jefes designados por el Gobierno. En el trabajo público, las huelgas legales se redujeron a menos de la mitad (91) respecto del año anterior (214), mientras que los paros ilegales se redujeron de 40 a 24 (Díaz Bahamonde, Lüders, y Wagner 2016). No es fácil aducir la baja en la cantidad de huelgas únicamente al factor represivo, pues se puede notar que aquel año fue el de menor inflación y, por el contrario, el mayor aumento de salarios en todo el período del Gobierno de Frei Montalva (Stallings 1978: 251; Durán 2018: 274; Rodríguez 2014: 499). Es probable que la baja en la actividad de huelgas tuviera relación con los amargos triunfos del año anterior. Pero también pueden observarse ambos movimientos –baja de la inflación y aumento de los salarios– como respuestas a un activismo dramático del movimiento obrero, sostenido por más de un año y saldado con varios muertos a su haber. Esta explicación toma fuerza si se atiende que, en abril de 1966, el Gobierno pudo aprobar su ajuste salarial en el Congreso, pero no pudo lograr incluir en él una nueva legislación que le daba amplia tutela y discreción represiva al Gobierno sobre las huelgas obreras. Finalmente, la interacción de estos tres datos en 1966 –número de huelgas, IPC (de 1965) y salarios– respecto a los años previos y siguientes, nos permite observar la importancia del factor salarial en la inestabilidad política del período y, en específico, en el trabado desarrollo del programa de Gobierno de Frei Montalva.

Se ha sugerido que en 1967 habría ocurrido una crisis económica. Si bien es bastante discutible el uso del término crisis, no deja de ser cierto que, en todas las áreas del crecimiento, hubo un estancamiento del impulso económico en relación a los dos primeros años de la administración demócrata cristiana. En este “enfriamiento” productivo parece haber ayudado el freno al gasto fiscal decidido por el Gobierno a mediados de 1966, y que afectó áreas políticamente sensibles como vivienda y salarios (Rebolledo Leyton 2005). Es difícil hablar de una crisis cuando el crecimiento se mantiene, pero es cierto que este baja

notoriamente respecto de las cifras de 1965 y 1966 (Díaz Bahamonde, Lüders y Wagner 2016). Si a los problemas económicos le sumamos el desfonde sindical de la DC visto más arriba, las condiciones de avance político de la política gubernamental de contención salarial se volvieron muy difíciles, acaso imposibles, hacia 1967.

#### **4. Los ‘chiribonos’, 1967. La última batalla salarial y la derrota definitiva de Frei Montalva**

Una de las principales diferencias con los conflictos de 1965 y 1966 es que en 1967 el Gobierno no intentó imponer un límite a los aumentos salariales, entregando la decisión a la voluntad de los empresarios del sector privado. De esta forma, y como denunciaron los sindicatos, los gremios se asociaron para enfrentar en colectivo las demandas de los trabajadores, principalmente a través de la Sofofa y otras cámaras de empresarios por rubro. Ante ello, los obreros volvieron a responder con una política específica para el conflicto. El 8 de marzo de 1967, la CUT y las nueve federaciones del sector privado se concentraron en Santiago, como forma de exhibir públicamente su coordinación en pos de las luchas salariales de aquel año. Como indicó la prensa, esta unidad no solo era un reflejo de la similar política emprendida por los patrones, sino que se constituyó para enfrentar “la lenidad de las autoridades del Trabajo para decidir frente a los pliegos y demandas gremiales” (*Las Noticias de Última Hora* 1967a: 5).

Las huelgas se volvieron a desatar y pasaron de 828 en 1966 a 2.464 en 1967 (Bahamonde, Lüders y Wagner 2016). Solo contando las 894 huelgas ilegales, se superó el total de huelgas de 1966. En el sector público, las huelgas registradas en 1967 (244), dirigidas por sindicatos históricamente más centristas, superaron las 91 de 1965 y las 214 de 1965. Ya en marzo, la prensa destacaba la diversidad de miles de obreros que habían llevado sus luchas salariales hasta la huelga. Así, mineros de todo tipo, obreros de Chilectra, panificadores, telefónicos, metalúrgicos y de la construcción, se contaron por miles presentando pliegos de peticiones con aumentos salariales o votando la huelga a medida que avanzaba 1967 (*Las Noticias de Última Hora* 1967b: 16). Entre las huelgas emblemáticas de aquel año se cuentan,

entre otras, la de Carozzi, la de los obreros de la construcción de la represa de Rapel y la de panificadores (que incluyó importantes grados de violencia). En los empleados fiscales había una nueva mayoría sindical, en la cual se mantenía a la cabeza el centrista Partido Radical pero ahora en alianza con un fortalecido FRAP, lo que ilustra la evolución política de los trabajadores estatales hacia fines de la década. Esto significó un aumento inmediato en los llamados a movilización de parte de la directiva, a su vez que un mayor alineamiento con la CUT (*Las Noticias de Última Hora* 1967c: 6). Este cambio de actitud, tanto de las bases, al votar por la izquierda sindical, como de la nueva dirigencia, puede explicar el aumento de las huelgas en el sector público en 1967.

Luego de las elecciones municipales de abril de ese año, que mostraron el desgaste electoral de la DC, y luego de dos años de conflictividad obrera, el Gobierno realizó un último intento por sostener la iniciativa en la política y ante la lucha social. Hacia finales de aquel año propuso un sistema de ahorro forzoso de las alzas salariales que serían decretadas, al que se le llamó Fondo de Capitalización Nacional de los Trabajadores. Con inmediata y apenas disimulada desconfianza, los trabajadores y la prensa rechazaron los ‘chiribonos’, denominados así al unir el término usado para referirse a los cheques sin fondos –‘chirimoyos’– con los bonos que entregaría el Gobierno en lugar del dinero del alza salarial. Los sindicatos reunidos en la CUT, los partidos de izquierda y parte de la DC mostraron una clara negativa a la idea del Gobierno y este decidió intentar la negociación a nivel político, sin retirar su proyecto ante la presión obrera (*Las Noticias de Última Hora* 1967d: 7). Como si el proyecto no fuese lo suficientemente conflictivo, el 18 de noviembre la prensa anunció que a él se le agregarían unas “disposiciones para evitar conflictos del trabajo”, entre las cuales destacaba la imposición del ajuste automático de salarios, la suspensión por un año de la presentación de cualquier tipo de pliegos de peticiones, además de la prohibición legal de realizar huelgas. Esta batería legal fue sostenida por el ministro del Interior, Bernardo Leighton, como medidas de “defensa nacional” contra el movimiento obrero y sus llamados a la huelga: “si hay personas que pretenden parar al país, naturalmente que estas hacen

peligrar al país” (*El Mercurio* 1967a: 1). La resistencia a estas posturas vino de todo el arco sindical, pero lo que más sintió el Gobierno fue el abierto rechazo de los grupos de empleados, como los bancarios o los del Servicio de Impuestos (*El Mercurio* 1967a: 28). Estos gremios, como ya hemos visto, habían sido históricamente centristas, pero en el marco de las luchas salariales con el Gobierno de Frei se habían ido alejando de la influencia DC y acercando al liderazgo de izquierda de la CUT. El nivel de amplitud que convocó la oposición obrera a la iniciativa de los ‘chiribonos’ fue inédito y la CUT llamó a una huelga general para el 23 de noviembre de 1967. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) que, como dijimos, había radicalizado sus dirigencias, se sumó al llamado a la huelga indicando que “el ahorro forzoso significa, además, un nuevo despojo al régimen previsional, ya deteriorado por el actual Gobierno” (ANEF 1967). Sectores que históricamente se habían mantenido distantes de los paros nacionales y de la CUT, como los portuarios, a través de la Confederación Marítima de Chile (COMACH), acordaron rechazar el plan de reajustes propuestos por el Gobierno y participar en el paro contra los ‘chiribonos’. Durante los días previos a la huelga del 23 de noviembre, los militantes sindicales recorrieron todo el país agitando la paralización, y las asambleas más grandes en teatros de los sindicatos, convocados para el mismo fin, se convirtieron en eventos masivos (*Las Noticias de Última Hora* 1967e: 16).

Ante el discurso de la inminente crisis económica y el llamado a la responsabilidad que hizo el Gobierno a los sindicatos, la CUT respondió, a pocos días del paro del 23, indicando un argumento de importancia para los fines de este escrito. Luis Figueroa, del PC y presidente de la Central, explicó por qué para él y su organización la lucha salarial, lejos de llevar el país a la crisis económica, era una propuesta de salida de la misma:

Se han lanzado muchas versiones e intrigas a la circulación respecto a la conducta de la CUT frente al problema de los chiribonos. Nosotros fuimos claros desde el primer intento, rechazándolos de manera terminante, tal como rechazamos toda la política de reajuste anunciada por el Gobierno. En oposición a esa política hemos elaborado una plataforma de lucha que toma en cuenta cuidadosamente la cuestión del desarrollo nacional. No estamos presionando sólo en

el plano salarial, sino que estamos exigiendo un cambio general de política. (*Las Noticias de Última Hora* 1967f: 4)

El 23 de noviembre el Gobierno declaró el Estado de Emergencia en varias regiones del país, y nombró consecuentemente jefes de plaza, así como también varios interventores en las empresas estatales que estaban ya movilizadas. Entre los militares destacados en estas tareas resalta en las fuentes el coronel Augusto Pinochet, quien tuvo a su cargo en 1967 la intervención de la Empresa de Transporte Colectivo del Estado (ETCE), en conflicto desde octubre de aquel año (*El Mercurio* 1967b: 1). Como se ve, mientras el movimiento obrero aumentó su convocatoria por la vía de acrecentar su amplitud social y su base movilizada, el Gobierno vio reducida su base de trabajadores –por la pérdida de direcciones sindicales durante el año, y por la enajenación de apoyo durante la coyuntura de los ‘chiribonos’, todo mientras elevaba su tono confrontacional apelando a la ya clásica mano dura. En la misma senda, el Gobierno dotó de nuevos armamentos y tácticas al aparato represivo, integrando grupos de carabineros con militares en tareas de orden, lo cual fortaleció la imagen amenazante del Ejecutivo en los días previos a la paralización convocada por la CUT (*Punto Final* 1967: 4). En esas condiciones, el paro del 23 de noviembre se presentó como una prueba de fuerzas entre el movimiento obrero y el Gobierno. El paro tuvo dos resultados inmediatos importantes de destacar. Primero, si bien la huelga fue parcial y así se preocupó de destacarlo la prensa afín al Gobierno, al observar las cifras se denota que la movilización tuvo amplio apoyo en sectores estratégicos como la minería del cobre y los puertos, así como en las empresas estatales donde la DC presumía de mayor control, como en Chilectra o en la ETCE (*El Mercurio* 1967c: 28). De esta forma, el desfonde sindical del Gobierno expresaba también una radicalización por la izquierda de obreros que otrora podía contar entre sus bases. En segundo término, la represión armada de la huelga tuvo un resultado dramático: siete muertos por balas estatales al finalizar la jornada, y decenas de obreros detenidos y procesados por tribunales militares. Los funerales de las víctimas le sirvieron al movimiento obrero como espacio para mantener la protesta por varios días tras la huelga del 23 (*Las Noticias de Última Hora* 1967g: 8-9; *Las Noticias de Última Hora* 1967h: 7).

Combinando ambos saldos, es posible observar un fortalecimiento del movimiento obrero en sectores de alta importancia económica, a la vez que un aislamiento del Gobierno, atrincherado en su último recurso: la violencia estatal.

El movimiento contra los ‘chiribonos’ entró en su etapa final. En diciembre, los portuarios anunciaron un paro de 21 horas para el día 27 de ese mes si se insistía en la medida de ahorro forzoso por parte del Gobierno. Luego, en enero, la CUT daría por terminadas sus conversaciones con la DC y el Gobierno. En su tradicional mensaje de año nuevo, la presidencia de la CUT mantenía su rechazo a los ‘chiribonos’, argumentado en una muy simple contradicción de clase: “En el hecho esto significa que los capitalistas les sacan la plata del bolsillo a los trabajadores para aumentar no las ganancias de los trabajadores, sino que la ganancia de los capitalistas”. A reglón seguido, decretaba la derrota del Gobierno:

Ahora el Gobierno sostiene que para salvar la situación es indispensable establecer el ‘ahorro forzoso’ de los trabajadores, que en el fondo significa la implantación de un brutal impuesto directo a los sueldos y salarios. [...] Esto significa en el hecho que la política económica y social del Gobierno ha fracasado pues ahora ya no habla de las vigas maestras anteriores y pretende descargar directamente sobre las espaldas de los asalariados el peso de la crisis económica del país. (*Las Noticias de Última Hora* 1968: 7)

La política obrera alcanzaba el límite de su táctica de lucha salarial contra el Gobierno: habían puesto a la DC y a Frei Montalva ante el dilema de insistir y asumir el costo social y político o retirar su propuesta y, con ella, terminar su fracasada guerra salarial contra el movimiento obrero. Intentar avances políticos más allá de ese punto no era su especificidad, sino terreno de políticos. En una entrevista dada a la revista *Punto Final* por el secretario general de la CUT y militante del PS, Hernán del Canto, el triunfo obrero en la lucha salarial, expresado en el paro del 23 de noviembre de 1967, les había mostrado “que existe una reserva contenida de combatividad en la clase trabajadora, que cuando se le orienta adecuadamente se expresa y rompe las tradicionales formas de lucha que se dan las organizaciones sindicales”. A su vez, el dirigente sindical destacó que el paro constituía una advertencia para:



La dirección política de la clase obrera que aún no comprende que el centro de su acción debe ser la clase obrera y no el parlamento, lugar en el cual no se educa a las masas, no se las prepara para acciones de combate, como tampoco se las prepara para su objetivo histórico: la conquista del poder. (*Punto Final* 1968: 10)

La decisión final respecto de los ‘chiribonos’ quedó en manos de la DC. Luego de una fuerte tensión interna, que incluyó una reafirmación crítica del poder de Frei Montalva hacia la interna del partido, el Gobierno decidió llevar en soledad su polémico plan de ahorro salarial al Congreso. Allí fue derrotado por todas las fuerzas políticas, de la derecha y de la izquierda. Esta derrota fue no solo para los ‘chiribonos’, sino para toda la línea política del Gobierno de Frei Montalva y la DC respecto de los salarios. El fracaso político del trienio inicial del Gobierno se evidenció en el cambio de ministros ocurrido apenas fracasó en el Congreso el proyecto de los ‘chiribonos’: Thayer dejó de ser ministro del Trabajo, Molina de Hacienda y Leighton de Interior. El equipo político original del gabinete de Frei Montalva se desarmó, y la política de Gobierno no volvió a mirar el programa e ideario de ‘la revolución en libertad’ de 1964 (Yoclevzky 1985: 306). De ahí en adelante, el ejecutivo no intentó medidas similares y desde 1968 decidió negociar los salarios directamente con la CUT. A su vez, la Central asumió su victoria, dejó de presionar como bloque sindical al Gobierno y no realizó más huelgas generales relativas a temas salariales. Sus preocupaciones desde 1968 y hasta 1970 se concentraron en la defensa de la institucionalidad ante un posible golpe de Estado y las luchas políticas internacionales, como la guerra de Vietnam.

### **5. El balance del movimiento obrero: el caso de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP)**

El balance político de las luchas salariales de 1964–67 se hizo también en los sindicatos. Aunque resulta difícil encontrar registros del debate obrero del período, existen algunas fuentes que permiten ilustrar cómo este fue abordado por los grupos obreros más politizados. Se observa que las experiencias de las luchas salariales fueron consideradas contemporáneamente por algunos obreros como una elevada forma

de política. En febrero de 1967, en las páginas de *Unidad Gremial*, el medio de los empleados –en su mayoría exobreros– técnicos y de terreno de la CAP, ubicada en Talcahuano, los militantes sindicales reflexionaban sobre sus luchas recientes y por venir con un agudo cálculo y un frío análisis destilando una claridad política digna de citar extensamente:

Nunca en los años anteriores la pugna entre capital y trabajo habían presentado aspectos tan especiales como ahora. La característica principal es la poderosa tendencia hacia la unidad. Los sectores de obreros y empleados buscan la manera de borrar las diferencias y recibir un tratamiento único de parte de la compañía. Casi se logró este año, pero se avanzó bastante. Quedó patente en todos los espíritus las aspiraciones que, seguramente, se concretarán en el futuro. [...] Los trabajadores no temen la huelga. No la desean. Pero la táctica empleada por la compañía es volver la espalda a toda posibilidad de entendimiento. La abrumadora mayoría con que ha sido aprobada el movimiento en ambos sectores es una clara manifestación que ha hecho meditar a los empresarios sobre la gravedad de las consecuencias que pueden traer un paro prolongado para el país. Un primer síntoma positivo se produjo inmediatamente después de conocidos los resultados de las votaciones. La comisión de negociación manifestó su deseo de reanudar conversaciones directas. En este aspecto hay que destacar un hecho de trascendental importancia. Hay que evitar los arreglos unilaterales. Las directivas de empleados y obreros deberán procurar que el arreglo sea simultáneo. Si los obreros firman acta de avenimiento, serán utilizados después contra los empleados, pues la Usina permanecerá en actividad parcial. En cambio, si los trabajadores se mantienen unidos, su movimiento no perderá un ápice de su fuerza. Esenciales características, que hablan muy bien del nuevo espíritu gremialista que anima al personal de la CAP, presenta este año la lucha en torno al pliego de peticiones. Demostrando un hondo sentimiento de unidad, tanto empleados como obreros se han pronunciado por mayoría abrumadora por la huelga, como única arma capaz de vencer la actitud intransigente de la compañía. (*Unidad Gremial, Informativo del sindicato empleados técnicos y de terreno de la Compañía de Acero del Pacífico - CAP 1967: 1*)

Tras la huelga de la CAP de 1967 y luego de la lucha nacional contra los ‘chiribonos’ y de la masacre de noviembre de ese año, Juan Urrutia Muñoz, un exobrero subido de categoría a empleado intentaba explicar en *Unidad Gremial* las razones de por qué los dirigentes más timoratos habían perdido la elección sindical de la siderúrgica.

Dichas razones denotan una comprensión política de las formas sindicales consideradas corporativistas. El autor plantea que parte de la explicación estaba en la nueva actitud de los empleados organizados de la CAP, los que se habían vuelto más combativos y unitarios con los obreros gracias al “paso masivo de los compañeros mecánicos, soldados, y otros a su nueva calidad de empleados”, permitiendo “inclinarse la balanza favorablemente a este sector, en lo que se refiere al medio en el cual se desenvolvían los actuales dirigentes, quienes casi en su totalidad son exobreros”. Para Urrutia, la causa principal del cambio en la dirección sindical se debía a la disposición de abrir un conflicto salarial y la capacidad –o no– de vencer en él, con la centralidad puesta de forma absoluta en el interés de clase:

Finalizadas las elecciones de todos los sindicatos de empleados de la Cia. de Acero del Pacífico S.A., y conocidos los resultados de las mismas, es necesario hacer un análisis frío del por qué del cambio, en el equipo de antiguos dirigentes de estas organizaciones gremiales: Sin pretender que estas líneas sean la verdad absoluta, estimamos servirán de pauta para guiar la discusión y sacar las correspondientes experiencias que nos permitan desarrollar una labor acorde con lo que desean las bases de los distintos sindicatos.

[...] Cuando los trabajadores han elegido a dirigentes que tienen clara concepción de lucha es porque ha entrado en las masas el espíritu, de que es necesario cambiar los métodos, que hasta aquí habían empleado los antiguos dirigentes, para buscar la salida a los problemas propios de la clase trabajadora, quienes desean la solución empleando otros medios. Hemos visto con amargura e indignación que, a pesar de contar con todo el apoyo de las bases para desarrollar una acción decidida en defensa de sus intereses, había dirigentes que estimaban que la lucha reivindicativa había que darla recurriendo incluso a los tribunales de justicia, como si las leyes se hubieran hecho para los trabajadores, y la experiencia con el juicio de evaluación, les demostró a estos ilusos, cuán equivocados estaban, por eso hubo cambios; esa es la razón clara y concreta del por qué no fueron reelectos y es por eso que hoy tenemos otros dirigentes. Esperamos que por esta experiencia que hemos tenido, en el futuro se empleen los métodos de lucha que a escala mundial están aplicando tanto los pueblos que hoy luchan por su liberación política y económica, como por los sindicatos que a través de la movilización directa logran arrancar reivindicaciones a lo compadre. La experiencia mundial está plagada de ejemplos, eso es necesario discutirlo y comprenderlo, ya que en la misma medida que esto se logre, seguirán avanzando las organizaciones sindicales. (Urrutia Muñoz 1967: 4)

El balance de los trabajadores organizados de la CAP no tiene que entenderse como algo común al resto de los trabajadores. Sin embargo, no tenemos por qué pensar que no había, por lo menos, cierta simpatía por este tipo de conclusiones. El desfonde sindical DC y el aumento del voto obrero para la izquierda durante la presidencia de Frei Montalva dan cuenta de tendencias masivas en la clase obrera en esa dirección (Zeitlin y Petras 1970). Por el lado de la política obrera y en el balance general, la maniobra de resistir por tercer año consecutivo el intento de ajuste salarial desde el Gobierno, a pesar de la represión, había terminado en éxito. Desde 1968, las prácticas de la CUT y la base del movimiento obrero tomaron caminos distintos, pero no contradictorios. Derrotada la política de ajuste del Gobierno, la Central se empeñó en los grandes temas de la política. Las bases mantuvieron la creciente actividad huelguista y un sostenido aumento de las tomas de fábricas y talleres. Se cerró así la fase de la lucha salarial de 1964 a 1967.

## 6. Conclusiones

En el ciclo de lucha salarial de 1964 a 1967 los sectores organizados del movimiento obrero fueron capaces de resistir el chantaje basado en la mentada “responsabilidad nacional” que hiciera el Gobierno de Frei Montalva. Es más, a partir de allí, desataron una lucha general por los salarios que finalmente logró constituir una fuerza social más amplia en el conflicto que la que desplegó el Gobierno, dejándole como única opción el uso de la violencia del Estado. Desde esta perspectiva, la lucha salarial estuvo lejos de constituir una despolitización.

Por el contrario, los obreros realizaron una política propia de proyección y objetivos razonados parcialmente que tuvo los elementos típicos de cualquier estrategia subalterna. En palabras de Hobsbawm: “aislar al adversario, conseguir aliados e influenciar al pueblo” (1977: 25). En la disputa salarial derrotaron fuertemente a la DC y al Gobierno, generando aumentos incluso en sus salarios reales. Además, la CUT amplió su base obrera y el sindicalismo creció velozmente, mientras aisló y quebró al sindicalismo DC, obligando al Gobierno al recurso de la violencia de Estado (la que, así y todo, no le permitió conseguir

sus objetivos de ajuste salarial). Se produjo en definitiva una política obrera, una técnica propia para las relaciones de fuerza entre intereses colectivos. Aunque, a diferencia de la pretendida universalidad de la política moderna, se trataba de una estrategia parcial para realizar un interés también parcial. Ante las preguntas originales de este artículo relativas a la relevancia política de la huelga salarial, así como a la forma en que el movimiento obrero asumió políticamente el conflicto salarial ocurrido entre 1965 y 1967, y reafirmando la hipótesis principal, es posible sostener que tales hechos fueron centrales en la radicalización del movimiento obrero y en la crisis del Gobierno de Frei y, en general, de la política chilena hacia fines de la década de 1960. Ante ellos, el movimiento obrero demostró una elevada claridad política, la que resulta aún más clara si la perspectiva se abre honestamente a comprender sus intereses directos. Al final, la conclusión resulta obvia: en una sociedad desigual también lo son las razones y objetivos por las cuales cada grupo decide intervenir en política.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ANEF. 1967. ANEF denuncia: despojo a los trabajadores. *Las Noticias de Última Hora*, 9 de noviembre de 1967, 15.
- Angell, A. y Moroni M. 1969. La clase obrera y la política en Chile. *Desarrollo Económico* 9(33), 33-65.
- Barrera, M. 1971. Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile. *Cuadernos de la Realidad Nacional* 9, 119-155.
- Barrera, M. 1978. El conflicto obrero en el enclave cuprífero chileno. *Revista Mexicana de Sociología* 40(2), 609-82.
- Barría, J. 1967. *Las relaciones colectivas del trabajo en Chile*. Santiago de Chile: Instituto de Organización y Administración.
- Barría, J. 1971. *Historia de la CUT*. Santiago de Chile: Prensa Latinoamericana.
- Boron, A. 1975. Notas sobre las raíces histórico-estructurales de la movilización política en Chile. *Foro Internacional* 16(61), 64-121.
- Central Única. 1965a. s/t. *Central Única*, abril de 1965, 2.
- Central Única. 1965b. s/t. *Central Única*, mayo de 1965, 1.
- Central Única. 1965c. Pliego de la seda moviliza a personas de 60 fábricas. *Central Única*, junio de 1965, 10.
- Central Única. 1965d. Urge la solidaridad. *Central Única*, junio de 1965, 3.
- Cerda, R. 2014. *La masacre de El Salvador. Huelgas, represión y solidaridad obrera en los Campamentos Mineros del Cobre. 1965-1966*. Santiago de Chile: Sartaña.
- Díaz, J., Lüders, R. y Wagner, G. 2016. *Chile 1810-2010 La república en cifras: historical statistics*. Santiago: Ediciones UC.

- Durán, G. Desigualdad y salarios en perspectiva histórica, siglos XIX y XX (239-78). En Jaksic I., Estefane A., Robles C., (eds.) *Historia política de Chile, 1810-2010 / Tomo III: Problemas económicos*. Santiago: FCE-UAI.
- Frei Montalva, E. 1964. *Discurso pronunciado por el presidente Eduardo Frei Montalva el 3 de nov. 1964*. Presidencia de la República, Secretaría de Prensa. Disponible en: [http://archivochile.com/Gobiernos/gob\\_edo\\_freim/de/GOBdefreim0004.pdf](http://archivochile.com/Gobiernos/gob_edo_freim/de/GOBdefreim0004.pdf) [10 de marzo, 2019]
- El Mercurio*. 1965a. Programas de Gobierno analiza Ministro del Trabajo en carta a los trabajadores del carbón. *El Mercurio*, 2 de marzo de 1965, 23.
- El Mercurio*. 1965b. También de Usted depende que ganemos la guerra contra la inflación. *El Mercurio*, 5 de marzo de 1965, 31
- El Mercurio*. 1967a. Disposiciones para evitar conflictos del trabajo. *El Mercurio*, 18 de noviembre de 1967, 1 y 28.
- El Mercurio*. 1967b. Nombrados jefes de plaza en el país. *El Mercurio*, 23 de noviembre de 1967, 1
- El Mercurio*. 1967c. Análisis del paro determina que fue parcial. *El Mercurio*, 25 de noviembre de 1967, 1 y 28
- Faletto, E. y Ruiz, E. 1970. Conflicto político y estructura social (213-55). En Pinto, A. (Ed.) *Chile, hoy*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Hobsbawm, E. 1977. Forty Years of Popular Front Government. *Australian Left Review* 1(61), 18-26.
- Landsberger, H. A., Barrera, M. y Toro, A. 1963. *El pensamiento del dirigente sindical chileno un informe preliminar*. Santiago: Instituto de Organización y Administración.
- Landsberger, H. A., y McDaniel, T. 1976. Hypermobilization in Chile, 1970-1973. *World Politics* 28(4), 502-41.
- Las Noticias de Última Hora*. 1965a. Gobierno trata de convencer a gremios para que no pidan más remuneraciones. *Las Noticias de Última Hora*, 17 de marzo de 1965, 4.
- El Mercurio*. 1965b. Veto contra los trabajadores, 7 de abril de 1965, 2.
- El Mercurio*. 1965c. Estudiantes democristianos apoyan alza de tarifas de la locomoción. *Las Noticias de Última Hora*, 21 de abril de 1965, 10.
- El Mercurio*. 1965d. La CUT y sus federaciones fijan hoy estrategia antes los reajustes. *Las Noticias de Última Hora*, 21 de abril de 1965, 10.
- El Mercurio*. 1965e. Obreros de INDURA se tomaron fábrica. *Las Noticias de Última Hora*, 2 de noviembre de 1965, 10.
- El Mercurio*. 1966a. Hecho positivo de 1965: la CUT le quebró la mano al Gobierno. *Las Noticias de Última Hora*, 1 de enero de 1966, 2.
- El Mercurio*. 1966b. Hay 11226 trabajadores paralizados en el país. *Las Noticias de Última Hora*, 3 de febrero de 1966, 16.
- El Mercurio*. 1966c. Firme el paro de los trabajadores. *Las Noticias de Última Hora*, 16 de marzo de 1966, 1.
- El Mercurio*. 1966d. La ruta que marca unidad de los trabajadores. *Las Noticias de Última Hora*, 16 de marzo de 1966, 5.
- El Mercurio*. 1967a. Fortalecimiento del movimiento gremial. *Las Noticias de Última Hora*, 8 de marzo de 1967, 5.
- El Mercurio*. 1967b. Miles de obreros en huelga. *Las Noticias de Última Hora*, 27 de marzo de 1967, 16.

- El Mercurio*. 1967c. Señalan directores de ANEF: Trabajadores fiscales vigilarán cualquier actitud del Gobierno. *Las Noticias de Última Hora*, 11 de mayo de 1967, 6.
- El Mercurio*. 1967d. Decepcionado Molina por “incomprensión” gremial. *Las Noticias de Última Hora*, 3 de noviembre de 1967, 7.
- El Mercurio*. 1967e. Marítimos y portuarios refuerzan preparativos del paro nacional CUT. *Las Noticias de Última Hora*, 12 de noviembre de 1967, 16.
- El Mercurio*. 1967f. Repercusiones del acuerdo de Paro Nacional. La CUT se convierte en poderoso ariete contra la política equivocada. *Las Noticias de Última Hora*, 17 de noviembre de 1967, 4.
- El Mercurio*. 1967g. La intensa represión armada no pudo impedir el paro en Santiago. CUT: Se superó lo previsto. *Las Noticias de Última Hora*, 24 de noviembre de 1967, 8-9.
- El Mercurio*. 1967h. La CUT despidió a sus mártires. *Las Noticias de Última Hora*, 26 de noviembre de 1967, 7.
- El Mercurio*. 1968. Luis Figueroa, presidente de los trabajadores chilenos señala: 1967: Tercer año de fracaso de Frei. *Las Noticias de Última Hora*, 1 de enero de 1968, 7.
- Lüders, R. 2012. *La misión Klein - Saks, los Chicago boys y la política económica*. Santiago de Chile: Documento de Trabajo, Instituto de Economía PUC.
- Ministerio de Hacienda. 1956. LEY-12006 23-ENE-1956. *Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional*, 23 de enero de 1956. Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=26970&buscar=12006> [10 de marzo, 2019].
- Ministerio de Hacienda. 1961. LEY-14688 23-OCT-1961 MINISTERIO DE HACIENDA. *Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional*, 23 de octubre de 1961. Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=27875&buscar=14688> [10 de marzo, 2019].
- Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 1965. LEY-16362 05-NOV-1965 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL *Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional*, 5 de noviembre de 1965. Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28421&idParte=8900101&idVersion=1965-11-05> [10 de marzo, 2019].
- Pizarro, C. 1986. *La huelga obrera en Chile, 1890-1970*. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
- Punto Final*. 1967. Sangre del pueblo derramó el Gobierno. *Punto Final*, 5 de diciembre de 1967, 1-5.
- Punto Final*. 1968. Entrevista: La CUT seguirá a la ofensiva. *Punto Final*, 2 de enero de 1968, 10.
- Rebolledo, R. 2005. La crisis económica de 1967 en el contexto de la ruptura del sistema democrático. *Universum* (Talca) 20(1), 124-39.
- Rodríguez Weber, J. 2014. *La Economía Política de la Desigualdad de Ingreso en Chile, 1850-2009*. Tesis de Doctorado en Historia Económica, Universidad de la República.
- Salazar, G. 2014. *Movimientos sociales en Chile: trayectoria histórica y proyección política*. Santiago de Chile: Uqbar.
- Stallings, B. 1978. *Class conflict and economic development in Chile, 1958-1973*. Stanford, Ca.: Stanford University Press.
- Thielemann, L. 2018. La rudeza pagana: sobre la radicalización del movimiento obrero en los largos sesenta. Chile, 1957-1970. *Izquierdas* 44, 114-33.

- Unidad Gremial* 1967. Informativo del sindicato empleados técnicos y de terreno de la Compañía de Acero del Pacífico - CAP. 1967. Respuesta de los trabajadores, 1.
- Urrutia Muñoz, J. 1967. Resultado de una elección y sus causas. *Unidad Gremial, Informativo del sindicato empleados técnicos y de terreno de la Compañía de Acero del Pacífico - CAP*, junio de 1967, 1.
- Valenzuela, A. 2013. *El quiebre de la democracia en Chile*. Santiago: Universidad Diego Portales.
- Vergara, A. 2008. *Copper Workers, International Business, and Domestic Politics in Cold War Chile*. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.
- Winn, P. 1990. El taylorismo y la gran huelga de Yarur de 1962. *Proposiciones* 19, 202-23.
- Yochevzky, R. 1985. La Democracia Cristiana chilena. Trayectoria de un proyecto. *Revista Mexicana de Sociología* 47(2), 287-352.
- Zeitlin, M., y Petras J. 1970. The Working-Class Vote in Chile: Christian Democracy versus Marxism. *The British Journal of Sociology* 21(1), 16-29.